

Medellín, dieciocho (18) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	EJECUTIVO (OBLIGACIÓN DE HACER)
Radicado	05001 31 03 005 2018 00511 03
Demandante	JOSÉ RODOLFO ARANGO MEDINA
Demandada	MARGARITA ARANGO MEDINA
Juzgado origen	QUINTO CIVIL CIRCUITO MEDELLÍN

Decide la Sala la apelación interpuesta frente al auto del 17 de agosto de 2022, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas dentro del proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES.

Mediante auto del 17 de agosto de 2022 el juez de primer grado aprobó la liquidación de costas realizada por la secretaría del despacho, en la cual se incluyeron como montos las agencias en derecho liquidadas en primera instancia por \$3.000.000 y en segunda instancia por \$1.000.000.

2. EL RECURSO.

La demandada se opuso a lo resuelto mediante recurso de apelación, el cual fundamentó indicando que la decisión de imponer las agencias en derecho en primera instancia no fue motivada por el *a quo* y, además, fijó una suma que supera en más de la mitad a la autorizada en el acuerdo PSAA 16-10554 de 2016, la cual considera desproporcionada.

La demandante se pronunció indicando que el juzgado tasó las agencias en derecho en un monto razonable, precisa que se trata de un proceso que lleva más de cuatro años y el bien respecto del cual se pretendía cancelar el usufructo tiene un valor comercial superior a \$600.000.000, por lo cual solicitó mantener incólume la decisión.

Mediante auto del 26 de octubre de 2022, el juzgado concedió la alzada, en el efecto devolutivo, ordenando la remisión del expediente digital a esta corporación para lo pertinente.

3. CONSIDERACIONES.

3.1 COMPETENCIA.

Por disposición del artículo 321 del CGP, el recurso de apelación contra autos procede solamente respecto de aquellos que la misma

norma relaciona o que precisan disposiciones especiales, encontrándose el presente asunto previsto en el numeral 5 del artículo 366 del mismo estatuto.

Para resolver, dispone el artículo 328 de la misma obra que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO.

Le corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto, el monto de las agencias en derecho fijadas en primera instancia se encuentra ajustado a derecho y, a partir de ello, determinar si hay lugar a revocar o confirmar la providencia que aprobó la liquidación de costas en el presente asunto.

3.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Costas procesales y fijación de agencias en derecho (normatividad y jurisprudencia).

Ha sido posición reiterada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que las costas procesales:

*"Se encuentran instituidas en favor de quien sale vencedor en el litigio, con el fin de compensar los gastos en que éste incurrió para hacer valer sus reclamos, lo que amerita que se incorporen las agencias en derecho, como una partida representativa del pago de honorarios al profesional que se contrató para ejercer vocería, en virtud del derecho de postulación"*¹

Para la tasación de las agencias en derecho, que integran los rubros que se incluyen en las costas, el numeral 4 del artículo 366 del CGP, dispone que:

"4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y

¹ CSJ, auto AC del 2 de diciembre de 2013, rad 2007-00019-01, reiterado en auto AC5073-2015 y AC3906-2018.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”

En similar sentido, el artículo 2 del acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, establece los criterios a tener en cuenta para la fijación de las agencias en derecho, así:

“Artículo 2o. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.”

Por otro lado, tratándose de procesos ejecutivos por obligaciones de hacer, el inciso final del literal c) del numeral 4 del artículo 5 del mencionado acuerdo, establece como tarifas:

*“- De obligaciones de dar especies muebles o bienes de género distintos al dinero, de hacer, o de no hacer, sin contenido dinerario.
Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”*

3.4 CASO EN CONCRETO.

En el *sub lite*, tal como se precisó, el marco tarifario previsto en el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, establecía la potestad al *a quo* de fijar las agencias en derecho entre 1 y 6 SMLMV, así, para la fecha en que se emitió la sentencia de primera instancia el 28 de noviembre de 2019, las agencias en derecho fijadas en \$3.000.000 correspondían a 3.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes², de los 6 salarios como tarifa máxima.

Ahora bien, en lo atinente a la justificación en el monto de las agencias en derecho fijadas, se advierte que el presente se trata de un proceso ejecutivo por obligación de hacer, en el que prosperaron la totalidad de pretensiones formuladas, en el que la demandada ejerció una

² Teniendo en cuenta que, para 2019 el salario mínimo se encontraba fijado en la suma de \$828.116.

"Al servicio de la justicia y de la paz social"

defensa activa³, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes⁴ y fueron practicadas en la audiencia del 28 de noviembre de 2019⁵, además, la gestión de la demandante duró más de un año en primera instancia⁶.

Tales circunstancias permiten concluir que el presente caso tuvo una naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado de la demandante relevante, derivada de la defensa ejercida por la demandada, por lo que, la condena en agencias en derecho debe ser superior a la tarifa mínima establecida en la norma.

En tal panorama, el despacho considera que la labor jurídica desarrollada por la demandante fue alta y prolongada en el tiempo, por lo que, la condena de 3.6 SMLMV, cercana a la mitad de la tarifa máxima, es proporcional a la gestión de la demandante en defensa de sus intereses.

Dado lo anterior, no se comparten los argumentos del apelante, por lo que la fijación de las agencias en derecho se hizo con fundamento en lo ordenado por el legislador, acorde con las normas citadas y vigentes y, por ende, el mentado valor consulta la realidad procesal, por lo que ningún reproche merece la decisión proferida por el juez de instancia en la fijación de las agencias en derecho. De este modo, se advierte la necesidad de confirmar el auto censurado. Sin condena en costas.


En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

4. RESUELVE.

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión impugnada, sin condena en costas.

SEGUNDO: REMITIR el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE


SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado

³ Ver ruta: carpeta "TRIBUNAL" / carpeta "01exp rad 05001 31 03 005 2018 00511 01" / archive "cua 1 rad 005 2018 00511 01.pdf" páginas 219 a 231.

⁴ Ibidem páginas 270 a 273.

⁵ Ibidem páginas 282 a 285.

⁶ Teniendo en cuenta la fecha de presentación de la demanda el 21 de septiembre de 2018 y la fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia el 28 de noviembre de 2019.